**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022.
RECURRENTE: CONSEJERA JURÍDICA DEL
EJECUTIVO FEDERAL.**

VISTO BUENO
SR. MINISTRO

MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

Cotejó

SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ

COLABORÓ: MARÍA DEL PILAR SÁENZ NIEMBRO

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día **treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés** por el que se emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve el Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 5/2022, interpuesto por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal en la que señaló como resolución recurrida la emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente del recurso de revisión **RRA *******, derivado de la solicitud de información registrada con el folio *********.

ANTECEDENTES.

- 1. PRIMERO. Solicitud de acceso a la información.** El diez de febrero de dos mil veintidós, fue presentada una solicitud de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la cual fue identificada con el folio *********, ante la Secretaría de Salud (sujeto obligado) requiriendo la siguiente información:

"Solicito conocer el número de dosis de vacunas contra la Covid-19 que hayan caducado antes de que se hayan podido administrar a la población. Solicito conocer el lote, la empresa fabricante y qué se hizo con las vacunas para su destrucción."

2. La Unidad de Transparencia de la Secretaría, para efecto de que se pronunciaran respecto de la información requerida, turnó la solicitud a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, quienes negaron su entrega pues consideraron la información reservada por un periodo de cinco años.
3. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud, a través de la resolución número *********, confirmó la clasificación anterior:

“RESUELVE

PRIMERO. *Se confirma la clasificación de la información como reservada hecha valer por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, por un periodo de 5 años, correspondiente a la información relacionada a “número de dosis de vacunas contra la Covid-19 que hayan caducado ... el lote, la empresa fabricante y que se hizo con las vacunas para su destrucción”, conforme a las fracciones I y VI del artículo 110 de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública. (...)*”

4. **SEGUNDO. Recurso de revisión.** El cuatro de abril de dos mil veintidós, el solicitante interpuso ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022

Personales recurso de revisión en contra de la resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Salud.

5. En la misma fecha, dicho Instituto le asignó al recurso de revisión el número de expediente **RRA ******* y lo turnó a la Comisionada Ponente, para los efectos del artículo 156, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
6. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, resolvió el recurso de revisión **RRA *******, en el sentido de **revocar** la respuesta emitida por la Secretaría de Salud en los considerandos y términos siguientes:

“... CONSIDERANDOS...”

[...]

CUARTA. Estudio de Fondo. *Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, en atención a la solicitud de acceso con folio citada al rubro, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

[...]

En razón de lo anterior, es que este instituto procederá al análisis de la clasificación invocada por el sujeto obligado de la información solicitada.

Análisis de la clasificación de la información, con fundamento en el artículo 110, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

En esa tesitura, con la intención de dilucidar de manera adecuada el problema planteado, resulta necesario realizar el análisis de la causal de reserva establecida en la fracción I del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que prevé lo siguiente:

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5/2022**

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable...

Por su parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, establecen lo siguiente:

...
Décimo séptimo. *De conformidad con el artículo 113, fracción I, de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:*

...
IX. *Se obstaculicen o bloqueen acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país.*

...
De los preceptos legales citados con antelación, se desprende que puede considerarse como información reservada toda aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

Asimismo, se señala que para que cualquier información sea considerada como tal, será necesario que con su publicación se obstaculicen o bloqueen acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país:

En ese orden de ideas es necesario retomar, que el particular requirió conocer sobre las vacunas contra la Covid-19 que hayan caducado antes de que se hubieran podido administrar a la población, lo siguiente:

- 1. El número de dosis.*
- 2. El lote.*
- 3. La empresa fabricante.*
- 4. Que se hizo con las vacunas para su destrucción.*

Para lo cual la Secretaría de Salud manifestó que la información sobre los lotes de vacunas se encuentra inmersa en los contratos celebrados con las farmacéuticas, mismos que podrían tener implicaciones por parte de las empresas contratantes, como que se den por terminados de manera anticipada los instrumentos, causando una severa afectación a las acciones adoptadas por el Gobierno de México como parte de la prevención y atención de la pandemia por la que se atraviesa, entre la que se encuentra la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, pues estas podrían dejar de obtenerse, asimismo manifiesta que la delincuencia organizada ha montado laboratorios clínicos apócrifos para falsificar la vacuna contra el coronavirus, con lo cual se pone en riesgo la vida y la salud de miles de personas.

Asimismo, el sujeto obligado refirió que se consideraba un tema de seguridad nacional, en el entendido de que dicha Secretaría de Salud es considerada como una instancia de seguridad nacional, así al

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

entregar el documento requerido estaría faltando a los acuerdos firmados para la compra de las vacunas contra COVID-19, generando graves riesgos para el país, no sólo en materia de salud, sino también teniendo implicaciones de carácter económico y social.

*Ahora bien, es importante puntualizar que el sujeto obligado, mediante el desahogo del requerimiento de información adicional **señaló que lo Clasificado era el lote**, mismos que se encuentran inmersos en los contratos que se han firmado para obtener el suministro por parte de las farmacéuticas Covax, Pfizer, CanSinoBIO, AztraZeneca y SINOVAC; por lo que el análisis de la clasificación: por el momento se enfocará únicamente en dicho dato.*

En ese orden de ideas, es de conocimiento público que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha creado un espacio web de nombre "Gestión Diplomática sobre Vacunas Covid-19", a través de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, espacio en el que se pueden consultar los contratos en versión pública, así como las actas de comité en las que se especifican: los datos que se encuentran reservados en cada uno de ellos, esto para conocimiento de la ciudadanía en general.

Es así, que este Instituto considero necesario la consulta de cada una de las actas de comité obteniendo que los datos clasificados en los contratos son los siguientes:

Contrato	Secciones clasificadas
"ASTRAZENECA UK LIMITED"	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Del considerando tercero, se reserva el precio unitario por dosis, dado que la farmacéutica aplica un precio distinto para cada cliente.</i> • <i>De las definiciones, se reserva: costo del producto, precio de compra estimados, funcionario ejecutivo y conducta fraudulenta intencional.</i> • <i>Del apartado de fabricación y suministro, donde se señala que estas actividades procederán previo a la autorización para ello, se reservan los detalles del producto de la vacuna preliminares.</i> • <i>Del apartado de pedido, precio y pago, donde se describe genéricamente el proceso de pedido, se prevé un plazo en concreto para comenzar tales actividades y consta el precio en dólares americanos, se reserva lo relativo al: pedido, precio, facturación, tiempos y métodos de pagos, así como atraso en pagos.</i> • <i>Del apartado entrega, distribución y almacenamiento, donde se hace referencia a cronogramas preliminares de entregas y se establecen</i>

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
 SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA
 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 5/2022

	<p><i>responsabilidades para las partes, se reserva lo relacionado con la entrega, almacenamiento y destrucción del producto.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Se reserva el apartado de producto defectuoso, donde se establecen las previsiones por el producto que llegara a tener algún desperfecto.</i> • <i>Se reserva el apartado de seguridad del producto, donde se describen las condiciones que deben cumplirse para asegurar el producto.</i> • <i>Respecto del apartado asuntos regulatorios, que se refiere a las disposiciones normativas que deben cumplirse, se reserva lo relativo al cumplimiento, así como los Estudios de Gestión de Riesgos y Seguridad Posteriores al Lanzamiento, donde se establece quién de las partes deberá cubrir los costos por tales conceptos.</i> • <i>Se reserva el apartado de propiedad intelectual, que desarrolla las cuestiones sobre los derechos sobre los productos.</i> • <i>Respecto del apartado de vigencia y terminación, donde se prevén plazos, se menciona a qué parte se facturarán los efectos de tales actividades, así como las indemnizaciones, reembolsos y tipos de gastos que se establecerán al efecto, se reserva la sección de terminación por abandono y la terminación con justificación.</i> • <i>Del apartado de indemnización, donde describen condiciones y tipos de daños que podrían dar lugar a la misma, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la ejecución del contrato, se reserva lo referente al comprador y al proceso.</i> • <i>Se reserva el apartado de liberación; limitación de responsabilidad. [...]</i>
<p style="text-align: center;">“PFIZER EXPORT B.V”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>En el Considerando Séptimo, se reserva lo relacionado con la jurisdicción.</i> - <i>Del apartado de definiciones, se reservan las de esfuerzos comercialmente razonables, privilegios e inmunidades y acuerdo de suministrar.</i> - <i>Del apartado de suministro del producto, donde se describe, la forma en que será abastecido el producto se reserva la: información relacionada con el cronograma de entregas, los faltantes de producto, las demoras en la entrega,</i>

	<p>el título sobre el producto y el riesgo de pérdida.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Del apartado de precio y pago, en el que se establecen las condiciones de precio y las formas de pago, se reserva lo relacionado con la forma de pago y los impuestos.</i>- <i>Del apartado normas sobre, la fabricación y garantía de calidad, en donde se establecen las características del producto, se reserva lo relativo al: rechazo del producto, la eliminación de envíos rechazados, el mantenimiento y conservación de registros; los desvíos, el retiro del mercado.</i>- <i>Del apartado manifestaciones y garantías, en donde se indican las declaraciones y condiciones de garantía para ambas partes, se reservan las garantías de Pfizer, la legislación sobre lucha contra el soborno y la corrupción, así como los controles internacionales al comercio, lo relativo a que no habrá otras garantías y el reconocimiento del comprador.</i>- <i>Del apartado vigencia y terminación, referente a la temporalidad del contrato, se reserva lo concerniente a: la terminación con justa causa, los derechos mutuos de terminación y el efecto de la terminación.</i>- <i>Se reserva todo el apartado relacionado con indemnización, donde se describen condiciones y tipos de daños que podrían dar lugar a la misma, desglosada en: indemnización por el comprador; asunción de la defensa por el comprador; derecho a participar; asunción de la defensa; privilegios e inmunidades y costos.</i>- <i>Se reserva todo el apartado relacionado con seguros y responsabilidad donde se establecen los seguros y la responsabilidad que tendrán las partes, conforme a los siguientes rubros: seguros; límites a la responsabilidad; exclusión de responsabilidad; renuncia a la inmunidad soberana; condiciones previas al suministro, así como seguros y responsabilidad. [...]</i>
--	---

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5/2022**

<p>"CANSINO BIOLOGICS INC.", "LATAM PHARMA INNOVATIVE VENTURES,S.A."</p>	<p>Se precisa que el contrato con Cansino obra exclusivamente en idioma inglés, indicando que el sujeto obligado no cuenta con la traducción oficial del mismo, en ese tenor, las secciones reservadas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Appendix A Delivery Schedule and Purchase Price. 1. -Advance Procurement Plan. -Quality Agreement for bulk supply. -Appendix 1. Quality Responsibilities Table. -Appendix 2. Bulk product specification. -Appendix 3. Agreed – upon Sub contractors. -Appendix 4. Recipient Supplier (firmas). -Appendix C. Template of Purchase Order. -Attachment 1. Definitions. -Attachment 2. Contact information. -Atcchment 3. Customer Engagement Programme Declaration. -Correo electrónico. -Teléfono. -Entregas, precios, calidad y especificaciones en los productos suministrados, responsabilidad, subcontrataciones, formatos de órdenes de compra, definiciones, información de contacto, compromisos de las partes.
--	---

De lo anterior, no se advierte que se haya considerado como información clasificada en los contratos los números de los lotes de vacunas.

Con independencia de ello, la parte solicitante no busca conocer los lotes de todas las vacunas adquiridas, sino solo de aquellas que ya caducaron antes de que pudieran aplicarse.

Al respecto, el sujeto obligado también argumentó que se; encuentra emitida una alerta a nivel mundial que invita. a los Estados a encontrarse vigilantes ante las redes de delincuencia organizada interesadas en sacar partido de las vacunas contra la COVID-19, tanto de forma física como en línea.

De tal forma que, en nuestro país, se ha detectado que los grupos de delincuencia organizada han montado laboratorios clínicos apócrifos para falsificar la vacuna contra el coronavirus, con lo cual se pone en riesgo la vida y la salud de miles de personas.

*En ese orden de ideas, **este Instituto considera que es necesario recalcar que lo que se han solicitado son los números de lote de las vacunas que ya han caducado, es decir que según lo establecido por las farmacéuticas; han alcanzado su límite de tiempo para ser aplicadas, por lo que, contrario a lo señalado, publicitar los lotes de aquellas resultaría en un beneficio para la***

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022

ciudadanía pues se harían identificables aquellas vacunas que ya no pueden ser utilizadas.

*Incluso, en el supuesto señalado por el sujeto obligado de elaboración de vacunas apócrifas, se considera que **dar a conocer los lotes de las vacunas caducadas ayudaría a prevenir que los grupos delictivos pudieran comercializar con biológicos apócrifos de vacunas con datos de identificación que se encuentran en un estado vencido.***

Ahora bien, en este punto también es necesario señalar el contenido de la Política Rectora de Vacunación contra COVID-19, mismo que establece:

“ ...

El sistema de registro mi.vacuna.salud.gob.mx genera un expediente de vacunación que se podrá imprimir para presentarlo en el Centro de vacunación y agilizar el proceso de recepción de la vacuna. [...]

El certificado de vacunación COVID-19 es un documento que emite la Secretaría de Salud para las personas que fueron vacunadas en México y requieren de un comprobante para efectuar un viaje a países que han definido como parte de su política migratoria, el requerir de un comprobante de vacunación para el ingreso a su país de personas extranjeras.

El diseño del certificado de vacunación se basó en el formato de certificado internacional de vacunación o profilaxis del Reglamento Sanitario Internacional, está escrito en español e inglés y cuenta con todos los datos de identificación de la persona, la vacuna aplicada, fecha y lote de aplicación.

...”

De lo anteriormente transcrito, se tiene que:

- *En un primer momento es necesario registrarse en el sitio web mivacuna.salud.gob.mx, para generar un expediente de vacunación, en el cual se anotarán los datos personales como el nombre, CURP, correo electrónico, domicilio, teléfono y **numero de lote.***
- *Una vez recibidas las dosis que contempla la política de vacunación, se podrá obtener un certificado de vacunación COVID-19, emitido por la propia Secretaría de Salud y que cuenta con los datos de identificación de la persona, la vacuna aplicada, fecha y **lote de aplicación.***

De tal modo, el mismo sujeto obligado ya ha dado a conocer el número de lote de las vacunas contra la COVID-19, sin que esto le hubiera causado por parte de las farmacéuticas algún tipo de cancelación, multas o cese al suministro de vacunas, ello pues dicho dato se anota en el comprobante de aplicación de la vacuna y es proporcionado en los centros de vacunación al público en general, al ser parte de la política de vacunación.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5/2022**

Aunado al hecho de que se considera que revelar el número de lote y la cantidad de vacunas que se han caducado antes de que se hayan podido aplicar, permite a la ciudadanía conocer el trato que se le ha dado a los insumos, obtenidos con dinero público, y la eficacia de la estrategia de vacunación.

Finalmente, de una búsqueda de información pública se localizó un memorándum con número de referencia OCM 292716, cuyo asunto es sobre el "Número de Lote y fecha de Caducidad para Producto AZD1222 emitido por AstraZeneca México, en el que se observa lo siguiente:

[...]

Como se muestra, el 4 de marzo de 2022, la farmacéutica AstraZeneca ha hecho de conocimiento sobre la distribución de sus vacunas en México y que, a través de la COFEPRIS, el gobierno mexicano ha autorizado para uso de, emergencia por COVID-19 la vacuna AZD1222 de la farmacéutica en cuestión, por lo cual dicha compañía ha detonado diversas actividades para el suministro de ese producto. Incluso, ha publicado el número de lote y la fecha de caducidad de esas vacunas.

Por lo que, si bien solo se trata de información que se refiere a las vacunas del laboratorio AstraZeneca, el número de lote y su fecha de caducidad, nos da un indicio de que la información solicitada por el particular no vulneraría la política nacional de vacunación en contra del SARS-Cov-2, ni los actos jurídicos que se celebraron con las farmacéuticas para la adquisición de las vacunas.

Cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión del 16 de mayo de 2022, discutió dos recursos sobre seguridad nacional (3/2021 y 6/2021), relacionados con los contratos de vacunas para la COVID-19; en donde se indicó:

[...]

*De tal forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la **divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional**, al obstaculizar o bloquear acciones tendientes a prevenir o combatir pandemias en el país, motivo por el cual, debe clasificarse tal información como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial -datos personales y secreto comercial-.*

En este contexto, se señaló que infringir las cláusulas de confidencialidad, revelar los datos personales de los proveedores plasmados directamente en los contratos, como son cantidades de dinero que se pactó que ingresarían a su patrimonio, significa la posibilidad de incurrir en incumplimiento de estos acuerdos de voluntades y poner en riesgo el combate a la emergencia sanitaria que les dio origen, con lo cual se obstaculizarían las acciones tendientes a

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

prevenir o combatir epidemias o para preservar y resguardar la vida y la salud de las personas. Asimismo, que la publicación de los comprobantes de pago puede poner en riesgo la seguridad nacional, toda vez que fue expresamente pactada por las partes de las obligaciones sinalagmáticas como confidencial, lo que implicaría la generación de distintas consecuencias negativas para el Estado contratante Mexicano, entre ellas, el incumplimiento de las cláusulas de los contratos, el menoscabo en su relación con las farmacéuticas la afectación a la estrategia implementada por el gobierno federal para combatir la pandemia generada por el coronavirus y, finalmente, se afectarían futuras contrataciones con otras farmacéuticas, pues se conocerían los datos económicos y financieros sobre los acuerdos alcanzados, por lo que es razonable que se limite temporalmente el acceso a esta información.

En ese orden de ideas, debe hacerse énfasis en que la información analizada por la Corte se centra específicamente en los instrumentos jurídicos que contienen las condiciones esenciales de la contratación así como aquella que da cuenta de montos, especificaciones de proveedores; sin embargo, lo solicitado en el caso concreto difiere de lo antes descrito, pues únicamente se trata de información sobre la identificación de las vacunas que caducaron antes de poder ser aplicadas, no así sobre pactos entre el Estado Mexicano y las farmacéuticas, estrategias comerciales de suministro, datos de proveedores etc.

Por ende, se considera que el presente asunto se aparta de las consideraciones que tuvo el Máximo Tribunal, por lo que no se advierte alguna afectación a las acciones para el combate de COVID-19 en nuestro país.

Lo previo, máxime que la ciudadanía ya es conocedora de los lotes de vacunas que se han aplicado, sin que esto haya causado un efecto negativo en el suministro de los biológicos, aunado a que con su revelación la sociedad se vería beneficiada, pues conocería los lotes de vacunas que no deben ser aplicadas.

Por lo expuesto, es importante enfatizar que no se desconoce la gravedad de la pandemia por COVID-19 que ha afectado a los ciudadanos, no solo de nuestro país sino de todo el mundo, los decesos y el colapso de los sistemas de salud, ya que, al ser una enfermedad completamente nueva, los médicos y científicos desconocían por completo sus causas, afectaciones y sus soluciones, situación que ha venido progresando y que se encuentra aún en desarrollo.

Es por ello que este Órgano Garante no es ajeno a la importancia que tiene para la población que la política nacional de vacunación no se vea afectada por factores externos, pues de ello depende el suministro de biológicos de los diferentes laboratorios que han ayudado no solo a la baja en contagios y hospitalizaciones graves, sino también a la pérdida de vidas humanas, sin embargo; luego del análisis realizado al caso en concreto no resulta procedente clasificar los lotes de las vacunas que caducaron antes de poderse aplicar a la población.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5/2022**

En suma, se enfatiza que la parte solicitante no quiere conocer los lotes -en general- de las vacunas adquiridas, sino solo de aquellas que hayan caducado y que por tal motivo no hayan sido aplicadas a la población.

Por ende, no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por seguridad nacional.

Análisis de la clasificación de la información, con fundamento en el artículo 110, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

En ese tenor, es necesario observar que el artículo 110, fracción VI, de la Ley Federal prevé que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría, relativas al cumplimiento de las leyes o que afecten la recaudación de contribuciones.

Por su parte, el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales) dispone que para que pueda considerarse cierta información como reservada bajo la causal invocada, se debe acreditar lo siguiente:

- 1. Que exista un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;*
- 2. Que aquel procedimiento se encuentre en trámite;*
- 3. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y*
- 4. Que de difundirse la información incida a tal punto que impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.*

Bajo esa tesitura, se advierte que la causal de reserva invocada por el sujeto obligado pretende permitir que las autoridades realicen las labores de verificación, inspección o auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, sin que el sujeto verificado o terceros, puedan influir o modificar el resultado, los hechos, actos u omisiones a fiscalizar.

En ese entendido, resulta conveniente entrar al estudio de la causal invocada a efecto de verificar si se actualiza o no, conforme a la acreditación de requisitos señalados en los Lineamientos Generales de referencia, en los términos siguientes:

- I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.***

En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado mediante el desahogo de un requerimiento de información adicional informó que la información solicitada formaba parte de un requerimiento de la Auditoría Superior

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

de la Federación, que ordena realizar la Auditoría número "343 Adquisición y Distribución de Vacunas Covid-19", lo anterior con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2021, misma que aún se encuentra en trámite.

Asimismo, el sujeto obligado señaló que de revelarse dicha información podría impedirse el adecuado desarrollo de la Auditoría, en la que se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión, así como de sus coadyuvantes, se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada, en tanto que se puede provocar la emisión de un sentido distinto del estado que guarda actualmente, alterar su contenido y en consecuencia formarse referencias erróneas en cuanto a su objeto y campo de aplicación.

Bajo ese contexto, se estima que el sujeto obligado acreditó la existencia de un proceso de auditoría, al ser esta la número 343 Adquisición y Distribución de Vacunas Covid-19, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2021.

*Razón por la que **se acredita el primero de los requisitos** para la actualización de la causal de reserva de la información invocada, esto es, la existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes (auditoría).*

II. Que el procedimiento de verificación se encuentre en trámite.

En ese sentido, cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 74) dispone que la Cámara de Diputados cuenta con diversas facultades exclusivas, entre ellas, la coordinación y evaluación del desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación; así como la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, a fin de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar su ajuste respecto de los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas.

Asimismo, que dicha revisión de la Cuenta Pública será realizada por la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación. Por lo que, si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades ingresadas o a los egresos respecto de los conceptos y partidas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o los gastos efectuados, se determinará la responsabilidad.

También, que para el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la autoridad, la Auditoría únicamente se encuentra compelida a emitir recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, conforme al marco normativo que le regula. En seguimiento de lo anterior, la norma prevé que (artículo 79):

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5/2022**

- *La Auditoría Superior de la Federación tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.*
- *La fiscalización en forma posterior de los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto de empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y entes públicos federales; la realización de auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.*
- *Realizará fiscalizaciones directamente de los recursos federales que administren o ejerzan los estados, municipios, la ahora Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.*
- *Fiscalizará los recursos federales que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.*
- *Entregará a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de la auditoría que concluya durante el periodo respectivo y entregará el Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a consideración del Pleno de la Cámara. Dicho Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley, incluyendo como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.*
- *Previo a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los demás informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, para que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, mismas que serán valoradas por la Auditoría para la elaboración de los informes individuales.*
- *El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que se haya entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presente la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en la Ley.*
- *La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas y; en el caso de no hacerlo, se*

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

- *En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, la justificación de su procedencia.*

Por su parte, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone:

- *Que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, y promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan (artículo 14).*
- *Que las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización superior, podrán derivar en Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y recomendaciones (artículo 15).*
- *Que, para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes (artículo 17):*

-Realizar, conforme al programa anual de auditadas aprobado, las auditorías e investigaciones. Para la práctica de Auditorías la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información y documentación durante el desarrollo de las mismas.

-Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio de la Auditoría Superior de la Federación sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma.

-Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias de juicio político.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5/2022**

- *Que el Titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la Cámara, el informe individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les correspondan, para que, en un plazo de 30. días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes (artículo 39).*
- *La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las acciones y recomendaciones (artículo 41).*

Dicho lo previo, se puede advertir que el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública está compuesto, medularmente por las siguientes 4 etapas:

- a) La planeación de auditorías;*
- b) El desarrollo de las mismas;*
- c) Presentación del informe de resultados, y*
- d) El seguimiento y conclusión de las acciones.*

De la normativa previamente descrita se advierte que la Auditoría Superior de la Federación entregará a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a consideración del Pleno de la Cámara el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública.

En ese orden de ideas, se desprende que la actividad de fiscalización sobre la información relativa a la auditoría de referencia aun no culmina, pues a la fecha de respuesta, del desahogo del requerimiento de información adicional, así como de la emisión de la presente resolución; aún no se alcanza alguna de las tres fechas de término del plazo para la entrega del Informe General.

*Razón por la que **se acredita el segundo de los requisitos** para la actualización de la causal de reserva de la información invocada, esto es, que el procedimiento se encuentre en trámite.*

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

*Mediante el desahogo del requerimiento de información adicional, el sujeto obligado informó que la auditoría tiene por objeto fiscalizar la gestión financiera **para verificar que el presupuesto asignado para la adquisición y distribución de la vacuna contra el virus SARS-CoV2(COVID-19), se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.***

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

*En este punto es preciso retomar que la información solicitada por el particular se refiere a los lotes, número de dosis, empresa fabricante y las acciones llevadas a cabo para la destrucción de las vacunas de COVID-19 que se encuentran caducas, por lo que si bien es cierto la información relativa al presupuesto asignado para la adquisición y distribución de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 está en un proceso de revisión ante la Auditoría Superior de la Federación, también lo es que **lo solicitado no guarda relación con el ejercicio del presupuesto.***

Es decir, se considera que la información peticionada tiene que ver con la administración y vigilancia de cada uno de los biológicos adquiridos, como medio de control de los insumos que corresponden a la política nacional de vacunación, por parte del gobierno federal, lo cual es independiente de los montos erogados y de la verificación que haga la autoridad competente sobre el ejercicio de dichos recursos públicos.

De tal forma, con independencia de que actualmente se encuentra una auditoría sobre cómo se ejercieron los recursos para la adquisición de las vacunas y si esto fue conforme a derecho, lo solicitado tiene una naturaleza distinta y su difusión no podría obstaculizar las facultades con las que cuenta la Auditoría.

*En razón de lo anterior, **no se acredita el tercero de los requisitos** para la actualización de la causal de reserva invocada por el sujeto obligado, esto es, la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal, pues lo solicitado por el particular no se vincula directamente con las actividades realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en el procedimiento de verificación del cumplimiento del presupuesto asignado para la adquisición y distribución de la vacuna contra el virus SARS-CoV2(COVID-19), se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.*

*Derivado de lo anterior, es susceptible determinar que el agravio de la persona solicitante deviene en **fundado.***

CUARTA. Decisión. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera procedente **REVOCAR** la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a efecto de que proporcione, sobre las vacunas contra la Covid-19 que hayan caducado antes de que se hubieran podido administrar a la población, lo siguiente:

- El número de dosis.
- El lote.
- La empresa fabricante.
- Qué se hizo con las vacunas para su destrucción.

En el supuesto de que la información cuya entrega se instruye contenga datos estrictamente clasificados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el sujeto obligado deberá elaborar las versiones públicas respectivas de

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5/2022**

conformidad con el artículo 108 de la misma Ley de la materia; además, el Comité de Transparencia deberá emitir una resolución fundada y motivada en la que confirme la clasificación de la información, misma que deberá ser notificada a la parte recurrente.

Dado que la modalidad preferente de entrega elegida por la parte recurrente fue en electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado deberá proporcionar la información a través de dicha modalidad.

Lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de la persona recurrente, a través del medio señalado en el recurso de revisión para efecto de recibir notificaciones.

Por lo expuesto y fundado, además; en los artículos 21, 133, 134, 145, 148, 156, 157, 159, 163 y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Pleno:

RESUELVE

PRIMERO. *Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se **REVOCA** la respuesta emitida por el sujeto obligado de acuerdo a lo señalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución.*

SEGUNDO. *El sujeto obligado, en un plazo no mayor de diez días hábiles, a partir del día hábil siguiente al de su notificación, deberá cumplir con la presente resolución, y posteriormente contará con un término de tres días para informar a este Instituto sobre su cumplimiento, con fundamento en el artículo 159, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

TERCERO. *Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artículos 168, 169, 170, 174 y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

CUARTO. *Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda.*

QUINTO. *Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expida certificación de la presente resolución, para proceder a su ejecución.*

[...]

7. TERCERO. Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional.

El veinte de julio de dos mil veintidós, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso Recurso de Revisión en Materia de Seguridad

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022

Nacional en contra de la resolución del Instituto del veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada en el **RRA *******, derivada de la solicitud de información con folio número *****.

8. Por acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaron formar y registrar el recurso con el número de expediente **5/2022**, lo admitieron con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie puedan surgir y se concedió la suspensión para efectos de no resolver ni se haga cumplir la resolución recurrida.
9. En el mismo proveído, se tuvieron admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por la recurrente y ordenó dar vista a la autoridad resolutora para que manifestara lo que a su derecho conviniera y enviara las constancias del asunto. Finalmente, se tuvo como terceros interesados a la solicitante de la información y al sujeto obligado, dándoles vista para que hicieran sus manifestaciones y, una vez que se dé inicio el segundo periodo de sesiones, se enviaran los autos a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para proveer lo relativo al turno del asunto.
10. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo el expediente a fin de formular el proyecto de resolución.
11. Por último, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, visto el estado procesal de los autos y dado que no había

trámite procesal que desahogar, se envió el asunto a la ponencia respectiva para la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

- 12. PRIMERO. Competencia.** Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente recurso, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o., apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política Federal; 157, párrafo segundo, 189 a 193 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Punto Segundo, fracción XVII, del Acuerdo General 5/2013 emitido por este Pleno, al tratarse de un Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional interpuesto por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

- 13. SEGUNDO. Procedencia.** El Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional es procedente, en términos del artículo 6o., Apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los diversos 189, párrafo primero, y 190 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que el recurso fue presentado por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Nacional, quien considera que la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pone en peligro la seguridad nacional.

- 14. TERCERO. Legitimación.** En términos de los artículos 6º, apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 189 y 190 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en materia de seguridad nacional la Consejera Jurídica del Gobierno Federal.
- 15.** El escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se interpuso el recurso en comento, fue presentado por María Estela Ríos González, quien se ostentó como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, acreditando dicha personalidad mediante la exhibición de la copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, el recurso fue interpuesto por parte legitimada.
- 16. CUARTO. Oportunidad.** En términos del párrafo segundo del artículo 189 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el recurso debe interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo garante notifique la resolución al sujeto obligado.
- 17.** La resolución recurrida se notificó al sujeto obligado el jueves siete de julio de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias contenidas en el expediente remitido por el organismo garante.
- 18.** De este modo el plazo transcurrió del viernes ocho de julio al lunes primero de agosto de dos mil veintidós, descontando de dicho plazo los días nueve y diez por ser sábado y domingo, así como también del dieciséis al treinta y uno de julio por corresponder al periodo vacacional de este Alto Tribunal.

19. Así, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 126 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si el recurso se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el jueves veintiuno de julio de dos mil veintidós, por lo que resulta indudable que el mismo se presentó de manera oportuna.
20. **QUINTO. Agravios.** La recurrente combate la resolución dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con los siguientes agravios:

Primero

- El Instituto no analizó que, de conformidad con el artículo 113, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral Décimo séptimo, fracción IX, de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, **se considera información reservada toda aquella que, de difundirse, potencializaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional** al obstaculizar o bloquear acciones tendientes a combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país. Asimismo, que el diverso 3, fracción I, de la Ley de Seguridad Nacional define el contenido de dicho concepto, entre otros, como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a la protección de la Nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, así como la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.
- De esta manera, la seguridad nacional es un término amplio en el cual se incluyen todas aquellas actividades, acciones, medidas,

programas e instrumentos necesarios para mantener la integridad, permanencia y estabilidad del Estado Mexicano. También puede entenderse como una garantía para evitar cualquier intromisión indebida que amenace el funcionamiento del Estado, particularmente, entre otros, la seguridad de su población, así como el ejercicio de los derechos fundamentales de la misma.

- El artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional señala, que, dentro de las amenazas a la seguridad nacional, se ubican los actos tendentes a **destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos**. De ahí que, cuando se actualiza una posible afectación a la seguridad nacional, acorde a lo previsto en los numerales 8, fracción V y 51 de la referida Ley, **debe clasificarse como reservada aquella información cuya revelación pueda ser utilizada para potenciar una amenaza**.
- Por su parte, de conformidad con los Lineamientos Generales, se reconoce como información reservada aquella que, de difundirse, pueda actualizar un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando se posibilite la destrucción o inhabilitación de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable de emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional.
- En ese orden de ideas, ante el surgimiento de una pandemia como la generada por el virus SARS-CoV-2, el Estado debe adoptar e implementar todas las medidas necesarias para contener su transmisión, atender a la población afectada y, en su caso, revertir sus afectaciones.

- Mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General reconoció en México como epidemia la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, al tratarse de un padecimiento grave de atención prioritaria; por lo tanto, en el marco de sus atribuciones, la Secretaría de Salud ha realizado diversas funciones como parte de la estrategia establecida en el territorio nacional en materia de salubridad general.
- Así, la estrategia de vacunación contra dicha enfermedad constituye uno de los pilares fundamentales de contención a la actual situación de emergencia, por lo cual **se considera una cuestión de seguridad nacional y de orden público**, toda vez que podrían realizarse actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como lo es la distribución de lotes de vacuna durante la ejecución de la Campaña Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
- Tales circunstancias permiten colegir que el derecho a la información de un particular se encuentra temporalmente acotado o restringido hasta en tanto se supera esta situación de emergencia; tal y como lo reconoce el propio artículo 6º, inciso A, fracción I, de la Constitución Federal, al establecer la restricción de acceso a la información pública por razones de interés público cuando se actualice alguna amenaza que ponga en riesgo la seguridad nacional. Por ello, toda pandemia constituye una situación inesperada de emergencia que genera condiciones de excepción para la continuidad del orden social, como se reconoce en los diversos 1º, 9º, 29 y 73, fracción XVI, bases 2ª y 3ª, constitucionales.
- De ahí que todas las acciones que adopte el Estado Mexicano para combatir la epidemia, como lo es el caso de la aplicación

emergente de vacunas, deben considerarse como una cuestión de seguridad nacional y de orden público.

- En razón de lo anterior, el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, el Consejo de Seguridad Nacional clasificó la Campaña Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 como un **ASUNTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD NACIONAL** en términos del artículo 3º, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Seguridad Nacional, por lo que la información relativa a los trámites y demás actos jurídicos necesarios para la ejecución de dicha política pública, están clasificados como reservados al tratarse de una cuestión de seguridad nacional e interés público que atañe a la protección de la población ante una amenaza epidemiológica. Lo anterior se hizo constar en el oficio ***** del once de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, en el que se da cuenta del Acuerdo aprobado por dicho órgano colegiado en materia de seguridad nacional,
- Se señala que la Secretaría de Salud está reconocida como una Instancia de Seguridad Nacional en términos del *"Acuerdo que modifica las bases de colaboración suscritas entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud"*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de dos mil catorce.
- Sin embargo, dichas circunstancias no fueron valoradas por el Instituto pues únicamente aduce que la información solicitada no es susceptible de reservarse por cuestiones de seguridad nacional, omitiendo analizar que, al tratarse de información que contiene datos sensibles relacionados con la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV2 que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado, se actualiza una amenaza en contra de la seguridad nacional.

- En efecto, la difusión de los datos requeridos por el solicitante constituye información clasificada debido a que forma parte de los documentos jurídicos suscritos con las farmacéuticas, razón por la cual se encuentran reservados en términos de los contratos suscritos por el Estado Mexicano para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2, y su difusión pone en riesgo la seguridad nacional debido a que se incumpliría con lo estipulado en dichos instrumentos contractuales -cláusula de confidencialidad-, lo que podría implicar un posible menoscabo de las relaciones entre México y las farmacéuticas de referencia.
- De entregarse al solicitante la información consistente en el número de dosis, lote, empresa fabricante y destino de las vacunas caducadas, podría provocarse la terminación anticipada de los contratos celebrados entre el Estado Mexicano y las farmacéuticas, tal y como lo reconoció la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Recurso en Materia de Seguridad Nacional, identificado con el número de expediente 3/2021.
- Derivado de lo anterior, **se actualiza la causal de reserva por seguridad nacional, pues la divulgación de la información solicitada implica un riesgo real demostrable e identificable en perjuicio a la seguridad nacional**, ya que la clasificación de la información tiene un fin constitucionalmente legítimo al buscar preservar los derechos a la vida y salud de la población, pues no existe un mecanismo más efectivo o diverso a la reserva que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas.
- Más aún cuando **resulta incierto el periodo por el cual continuarán las negociaciones y la vigencia de los instrumentos jurídicos celebrados con las farmacéuticas**, pues científicamente aún se desconoce la duración de la

inmunidad que confieren las vacunas contra el COVID-19 y, por ende, dichos contratos pueden ser sujetos de ampliación o modificación en razón de las necesidades del Estado Mexicano.

- Es importante mencionar que los lotes que componen cada entrega de vacunas se considera información clasificada, incluyendo la fecha de caducidad de cada uno de los lotes, por lo que la divulgación de la información solicitada corre el riesgo de ser duplicada o empleada de manera inadecuada para la elaboración de medicamentos apócrifos que podrían ser puestos a disposición del público en general a través del mercado informal; asimismo, dicha información puede ser empleada de manera indebida para la elaboración del documento oficial como lo son los certificados de vacunación que se emiten para cada persona que fue inoculada con las vacunas aplicadas en el territorio mexicano.
- El Instituto tampoco consideró que, desde el dos de diciembre de dos mil veinte, la Interpol emitió una alerta mundial dirigida a los países miembros, instándolos a estar vigilantes ante las redes de delincuencia organizada interesadas en sacar provecho de distribución de las vacunas contra COVID-19, tanto en forma física como en línea.
- La difusión de la información solicitada puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño e implementación de una política pública de emergencia, como lo es la Campaña Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV2, al darse a conocer detalles como lo son el número de lote de las vacunas que hayan caducado antes de que se hubiesen podido administrar a la población; en primer término porque es información contenida en los instrumentos jurídicos que suscribió el Estado Mexicano con diversas farmacéuticas y que la información ahí contenida se encuentra reservada en términos de la cláusula de

confidencialidad, tal y como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos del recurso de seguridad nacional con número de expediente 6/2021; y, en segundo término, porque dar a conocer la capacidad de respuesta del Estado Mexicano para enfrentar la pandemia, puede afectar la planeación para la adquisición de vacunas y las diversas etapas presentes y venideras que componen la campaña nacional de vacunación en proceso de ejecución.

- Luego entonces, resulta evidente que la resolución impugnada no está apegada a derecho y, en consecuencia, debe ser revocada para el efecto de que se confirme la clasificación de reserva durante el periodo señalado por la Secretaría de Salud, al actualizarse la causa de reserva prevista en el artículo 113, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral Décimo séptimo, fracción IX, de los Lineamientos Generales.

Segundo

- **La resolución no está debidamente fundada y motivada**, porque no valoró los argumentos para emitir la reserva de la información, en tanto se vulnera la estabilidad del Estado Mexicano al obstaculizarse las acciones tendentes a prevenir o combatir la pandemia del SARS-COV-2, potencializando los riesgos y amenazas en el quehacer estatal para el establecimiento de acciones para controlar y mitigar la enfermedad.
- La entrega de la información solicitada puede afectar la seguridad nacional, posibilitando que se obstaculicen y bloqueen las acciones tendentes a prevenir y combatir la epidemia de COVID-19 en nuestro país, infringiendo así los artículos 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 113, fracciones I, II, V y VII, de la Ley

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 110, fracciones I, II, V y VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los numerales Décimo Séptimo, fracciones VI y IX, y Décimo octavo, párrafo primero, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; pues se podría facilitar la información a grupos de la delincuencia organizada y que la misma sea utilizada con fines delictivos.

- La divulgación de la información referente al número de dosis de vacunas que caducaron antes de que se hayan podido administrar a la población, así como el lote, la empresa fabricante y el destino de las citadas vacunas, **implicaría un riesgo eminente a la seguridad nacional**, lo que permitiría a los grupos de la delincuencia organizada conocer la ubicación y destino que se le da a las vacunas no empleadas; asimismo, pudiera conllevar a la afectación de las obligaciones pactadas, faltando así a los acuerdos firmados para la compra de las vacunas, generando una, amenaza para la seguridad nacional en virtud de las implicaciones en materia de salud, pero también de carácter económicas y sociales, al actualizarse un riesgo en el suministro de las vacunas para la población, lo que afectaría significativamente en la estrategia de vacunación implementada por el Gobierno Federal.
- No es óbice a lo anterior que el Instituto refiera que el número de lotes de las vacunas ya se encuentra difundido por diversas farmacéuticas, pues ello no representa el detalle del tratamiento que se da a todas las vacunas no suministradas por el Estado. Es decir, la determinación impugnada no solamente consiste en dar a conocer el simple número de lote de vacunas caducadas, toda

vez que dicho Instituto lo que pretende es dar a conocer el tratamiento y destino de las vacunas no suministradas por el Estado a la población, situación que **pone en riesgo a la seguridad nacional al permitir que dicha información sea aprovechada por grupos de la delincuencia organizada**, sin considerar que el destino de los materiales biológicos también constituye información reservada que no debe revelarse durante la ejecución de la campaña nacional de vacunación.

- Por tanto, la importancia de la reserva de dicha información radica en asegurar la posibilidad de que nuestro país cuente de forma oportuna con los bienes o servicios públicos de emergencia, como lo es la recepción de los lotes, a nivel nacional, de vacunas que el Estado Mexicano adquiera para la ejecución de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2; situación que actualiza la causal de reserva contenida en la fracción I del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública al ponerse en riesgo la seguridad nacional.
- Conforme a lo anterior, se concluye que la resolución dictada por el Instituto debe ser **revocada y confirmarse la clasificación de la información como reservada por el periodo señalado por la Secretaría de Salud.**

21. SEXTO. Aspecto preliminar. Con el objetivo de delimitar la problemática jurídica que será materia de revisión por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario referirse a la naturaleza y alcance del Recurso de Revisión en Materia de Seguridad

Nacional, que ya han sido determinados por el Tribunal Pleno, al resolver los recursos de revisión 1/2015,¹ 1/2016², 1/2017³ y 2/2017⁴.

22. Al resolver dichos recursos se precisó que de acuerdo con los artículos 6º, apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 157 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Sin embargo, cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional, únicamente el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal podrá interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional.
23. Asimismo se indicó que, a la luz de los preceptos normativos antes citados, se advierte que el Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional constituye un medio de defensa legal extraordinario o de carácter excepcional.⁵ Lo anterior es así porque, tratándose de los sujetos obligados, tanto la Constitución como la legislación de la materia establecieron como principio general el carácter vinculatorio, definitivo

¹ Aprobado en sesión de tres de abril de dos mil diecisiete por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo no asistieron a la sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el primero previo aviso a la Presidencia y el segundo por desempeñar una comisión oficial.

² Aprobado en sesión de cinco de diciembre de dos mil dieciséis por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea por razones adicionales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra y anunció voto particular.

³ Se aprobó de diez de mayo de dos mil dieciocho.

⁴ Aprobado en sesión de treinta de octubre de dos mil diecisiete por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos, apartándose de algunas consideraciones, Pardo Rebolledo, Piña Hernández apartándose de algunas consideraciones, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VII, relativo al estudio. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Laynez Potisek votaron en contra.

⁵ Véase el “**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA**”, relativo a la reforma constitucional de los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 110, 110, 111, 116 y 122, en materia de transparencia, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, fojas 34 y 35.

e inatacable de las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que da cuenta de una de las características institucionales atribuidas desde la Norma Fundamental al citado Instituto, en su carácter de órgano constitucional autónomo; característica que incide en su estructura orgánica y que busca garantizar su autonomía e independencia funcional, con el objetivo de que sean efectivamente alcanzados los fines encomendados al órgano garante del acceso a la información, el que por su especialización e importancia social requiere de tener asegurada su autonomía respecto de los clásicos poderes del Estado. Al respecto, resultan ilustrativas las jurisprudencias P./J. 12/2008 de rubro: **“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.”**⁶ y P./J. 20/2007 de rubro: **“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.”**⁷

24. De esa forma, y para efectos de sus resoluciones, se precisó que el INAI no está subordinado a autoridad alguna, adopta sus decisiones con plena independencia y los sujetos obligados deben dar cumplimiento incondicional a sus resoluciones; lo anterior, sin perjuicio de que a los particulares asista el derecho de impugnar tales determinaciones ante el Poder Judicial de la Federación.⁸ Resultan aplicables las tesis de rubros: **“INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DONDE FIGURE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AUNQUE HUBIERE**

⁶ Datos de localización: Época: Novena Época, Registro: 170238, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 12/2008, Página: 1871.

⁷ Datos de localización: Época: Novena Época, Registro: 172456, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 20/2007, Página: 1647

⁸ Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el diverso 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

***EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE
JURISDICCIONALES.”⁹ e “INSTITUTO
FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES.”¹⁰***

- 25.** En consideración a las condiciones normativas antes señaladas, se determinó que el Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional no puede suponer un medio de defensa de la legalidad de todas y cada una de las cuestiones resueltas por el INAI, como si se tratara de una segunda instancia; de ahí que, por su propia naturaleza, el recurso se limita al análisis de aquéllas determinaciones, ya sean de carácter sustantivo o adjetivo, que tengan como resultado la divulgación de cierta información que, a juicio de las autoridades responsables o sujetos obligados, pueda poner en peligro la seguridad nacional; cuestión que será resuelta de manera definitiva y con plena jurisdicción por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- 26.** Así, a partir del alcance que ha sido asignado tanto constitucional como legalmente por este Tribunal Pleno al Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional y habiendo analizado tanto la resolución impugnada, como el conjunto de manifestaciones y alegatos del recurrente, resulta que esta Suprema Corte de Justicia se ocupará de examinar:
- **La determinación del Instituto en la que revoca la respuesta del sujeto obligado y se le instruye a entregar al solicitante la información relativa a las vacunas contra el virus SARS-**

⁹ Datos de localización: Época: Décima Época, Registro: 2002546, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 166/2012 (10a.), Página: 1101.

¹⁰ Época: Décima Época, Registro: 2002546, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 166/2012 (10a.), Página: 1101.

CoV-2, que hayan caducado antes de que se hubieran podido administrar a la población:

a) El número de dosis, el lote, la empresa fabricante y qué se hizo con las vacunas para su destrucción.

- 27. SÉPTIMO. Estudio de fondo.** Antes de emprender el estudio de fondo, debe precisarse que el análisis de los agravios esgrimidos por la Consejera recurrente se hará de manera conjunta. Lo anterior, pues de su lectura se advierte que en ambos agravios se ofrecen argumentos tendientes a comprobar la misma cuestión jurídica, esto es, la reserva por motivos de seguridad nacional de la información solicitada.
- 28.** Pues bien, la Consejera Jurídica, en esencia, argumenta, que la información consistente en el número de dosis, lote, la empresa fabricante y qué se hizo con las vacunas para su destrucción, debe ser clasificada toda vez que forma parte de los convenios suscritos con farmacéuticas para la adquisición de vacunas contra el SARS-Cov-2 y, por tanto, su difusión pone en riesgo la seguridad nacional debido a que se incumpliría con dichos instrumentos, menoscabando las relaciones entre México y dichas empresas e, incluso, provocaría la terminación anticipada de los contratos.
- 29.** Derivado de lo anterior, es que considera se actualiza la causal de reserva pues la divulgación de la información solicitada implica un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de la seguridad nacional, ya que esta contiene un fin constitucionalmente legítimo al buscar preservar los derechos a la vida y salud de la población, pues no existe un mecanismo más efectivo o diverso a la reserva que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas. Más aún cuando resulta incierto el periodo por el cual se continuarán

las negociaciones y la vigencia de los contrarios, pues aún se desconoce la duración de la inmunidad que confieren las vacunas.

30. Asimismo, sostiene que los lotes que componen cada entrega de vacunas se considera información clasificada pues, de entregarse dicha información, incluyendo la fecha de caducidad de las vacunas, se correría el riesgo de que fuera duplicada o emplearse de manera inadecuada para la elaboración de medicamentos y certificados de vacunación apócrifos. En ese sentido, también refiere que habría riesgo de que grupos de la delincuencia organizada conozcan la ubicación y destino que se le da a las vacunas no empleadas.
31. Afirma que divulgar la información solicitada no solamente consiste en dar a conocer el simple número de lote de vacunas caducadas, toda vez que dicho Instituto lo que pretende es dar a conocer el tratamiento y destino de las vacunas no suministradas por el Estado a la población.
32. Finalmente, refiere que la información solicitada puede llegar a menoscabar la implementación de la Campaña Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y ejecución de la Estrategia Nacional pues debe asegurarse la posibilidad de que México cuente con los bienes y servicios públicos de emergencia, como lo es la recepción de los lotes, a nivel nacional, de vacunas que el Estado Mexicano adquiriera para la ejecución de la Estrategia Nacional de Vacunación.
33. Pues bien, a juicio de este Tribunal Pleno, sus agravios devienen **infundados**.
34. Para arribar a dicha conclusión, es pertinente retomar las consideraciones que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación esbozó al resolver los Recursos de Revisión en Materia de Seguridad

Nacional 3/2021 y 6/2021¹¹, relativas a la actualización de la condición excepcional de seguridad nacional atribuida a las contrataciones celebradas entre el Estado Mexicano y diversas empresas farmacéuticas, con respecto a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2.

35. En estos asuntos, se dijo que, si bien no toda enfermedad o epidemia puede llegar a considerarse una amenaza a la seguridad nacional; el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2 sí genera dicha condición, pues no se trata de un tópico de menor gravedad, pues conllevó a la declaración de una pandemia a nivel internacional que no había generado tantos estragos y preocupación en más de cien años, además de que implicó consecuencias muy particulares para los distintos sectores de la población e instituciones del país, como el de la salud, económico, político y social.
36. Por ello, esta Suprema Corte advirtió que la divulgación de la información vinculada con las **condiciones esenciales de contratación** sin duda puede generar una afectación a la seguridad nacional, dado que en los contratos se establecieron cláusulas de confidencialidad para los: ***precios, costos, detalles y calidad del producto, entregas, garantías, pedidos, facturación, pagos, consecuencias de incumplimiento, propiedad intelectual y responsabilidad***; esto implica que su incumplimiento podría poner en entredicho el suministro de vacunas, al ocurrir una causa de terminación de los contratos con las farmacéuticas; que, en este momento, es base fundamental para el éxito de la Estrategia Nacional de Vacunación emprendida por el Gobierno Federal, por lo que es razonable que se limite temporalmente su acceso, pues se podrían generar **obstáculos**

¹¹ Fallados en sesión de dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

y bloquear acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias en el país¹².

- 37.** Expuesto lo anterior, es necesario tener presente que, en este caso, la información solicitada consiste en **el número de dosis, el lote y la empresa farmacéutica de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 caducadas, así como lo que se hizo con ellas para su destrucción.**
- 38.** Si bien dicha información es parte de los detalles de las contrataciones llevadas a cabo por el Gobierno Federal con las diversas empresas farmacéuticas para la adquisición y suministro de vacunas, lo cierto es que **esos datos, por sí mismos, no justifican la condición excepcional de seguridad nacional** advertida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en los recursos de revisión mencionados anteriormente.
- 39.** Esto, pues el número de dosis de vacunas, con los datos del lote y la empresa farmacéutica, correspondientes a las que caducaron, no se advierte que puedan generar un incumplimiento a las condiciones confidenciales del contrato que, por ende, pueda comprometer la seguridad nacional, obstaculizando el combate a la epidemia del virus SARS-CoV-2, ni tampoco que su divulgación permita a los grupos de delincuencia organizada a conocer la ubicación y destino que se le da a las vacunas no empleadas.
- 40.** Como bien lo sostiene el Instituto resolutor, la realidad es que el Estado Mexicano o las propias farmacéuticas que suministran las vacunas, no

¹² “**Décimo séptimo.** De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:

(...)

IX. Se obstaculicen o bloqueen acciones tendientes a prevenir o combatir epidemias o enfermedades exóticas en el país;”

han considerado que el número de vacunas de los contratos sea información que deba estar reservada, pues son datos que en ningún momento se han mantenido así.

41. De las versiones públicas e información de los contratos existentes que se encuentran en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores se advierte que el contrato con la farmacéutica Pfizer¹³ ampara la adquisición de 34,399,950 (treinta y cuatro millones trescientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta) dosis de vacunas; de la vacuna CANSINO BIO se adquirieron 35,000,000 (treinta y cinco millones) de dosis¹⁴; de AstraZeneca se realizó una pre-compra de 77,400,000 (setenta y siete millones cuatrocientos mil) dosis¹⁵ y de SINO VAC se compraron, por acuerdo de 4 de febrero de 2021, 10,000,000 (diez millones) de dosis y adicionalmente, en acuerdo complementario de 12 de marzo otras 10,000,000 (diez millones) más¹⁶.
42. También en esta página oficial, obra la información relativa al número de vacunas respecto a estos y otros convenios que el Estado Mexicano ha firmado con empresas farmacéuticas:

Contrato	Cantidades de dosis (millones)	Personas (millones)
COVAX	51.10	25.75
AstraZeneca	77.40	38.7

¹³ <https://portales.sre.gob.mx/transparencia/gestion-diplomatica-vacunas-covid-documentos/83-pfizer>

<https://portales.sre.gob.mx/transparencia/transparencia-categorias/category/2093-multilaterales?download=105554:nota-vacuna-pfizer>

¹⁴ <https://portales.sre.gob.mx/transparencia/transparencia-categorias/category/2093-multilaterales?download=105553:nota-vacuna-cansino>

¹⁵ <https://portales.sre.gob.mx/transparencia/gestion-diplomatica-vacunas-covid-documentos/85-astrazeneca>

<https://portales.sre.gob.mx/transparencia/transparencia-categorias/category/2093-multilaterales?download=105552:nota-vacuna-astrazeneca>

¹⁶ <https://portales.sre.gob.mx/transparencia/gestion-diplomatica-vacunas-covid-documentos/86-sinovac>

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

Contrato	Cantidades de dosis (millones)	Personas (millones)
Pfizer	34.40	17.2
CanSinoBIO	35.00	35
Sputnik V	24.00	12
AstraZeneca - Serum Institute	2.03	1.01
Sinovac	20.00	10
Total	243.93	139.66

- 43.** Así también, se advierte como información pública el número de dosis que se han recibido por cada farmacéutica, incluso a granel, actualizada al nueve de marzo de dos mil veintidós:

AstraZeneca	112,422,600
Pfizer	51,433,395
Sinovac	20,000,000
Sputnik V	20,000,000
Cansino	14,137,260
Moderna	6,272,000
Johnson & Johnson	1,350,000
TOTAL:	225,615,255

DOSIS A GRANEL

Cansino	8,000,000 (sustancia)
AstraZeneca	25,776,862 (sustancia)

44. Ahora bien, con respecto a los lotes de las vacunas, es un dato que se ha dado a conocer y publicado por el Gobierno Mexicano con relación a algunas vacunas, especificando los números de identificación de lotes y dosis que han sido liberadas, esto es, aplicadas a la población. Lo anterior, se advierte de las siguientes publicaciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

Lotes liberados de la Vacuna AZD1222 Covishield (AstraZeneca)

Lote	Fecha liberación	Número de dosis
77502	28-may-21	971,670 dosis
77534	09-jun-21	834,200 dosis
77544	10-jun-21	476,800 dosis
77573	18-jun-21	891,600 dosis
77611	23-jun-21	809,700 dosis
77581	28-jun-21	900,400 dosis
77621	01-jul-21	908,200 dosis
77491	02-jul-21	914,200 dosis
77622	07-jul-21	918,500 dosis
77672	07-jul-21	833,300 dosis
77688	12-jul-21	932,800 dosis
77673	12-jul-21	737,000 dosis
77689	14-jul-21	937,400 dosis
77699	14-jul-21	927,100 dosis
77722	20-jul-21	904,500 dosis
77700	27-jul-21	923,700 dosis
77701	27-jul-21	801,100 dosis
77723	27-jul-21	952,700 dosis
77735	27-jul-21	931,300 dosis
77742	28-jul-21	837,600 dosis
77743	28-jul-21	934,300 dosis

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

77769	30-jul-21	926,700 dosis
77761	04-ago-21	921,100 dosis
77783	05-ago-21	796,500 dosis
77784	05-ago-21	773,500 dosis
77785	05-ago-21	918,700 dosis
77786	10-ago-21	871,800 dosis
77803	30-ago-21	866,500 dosis
77804	30-ago-21	753,900 dosis
77805	30-ago-21	726,800 dosis
77806	30-ago-21	711,600 dosis
77807	30-ago-21	676,200 dosis
77837	30-ago-21	726,600 dosis
77884	06-sep-21	857,900 dosis
77903	13-sep-21	737,700 dosis
77904	14-sep-21	814,200 dosis
77905	14-sep-21	769,700 dosis
77948	28-sep-21	896,600 dosis
77855	29-sep-21	757,500 dosis
77856	29-sep-21	788,500 dosis
77857	29-sep-21	764,900 dosis
77840	29-sep-21	776,600 dosis
77839	29-sep-21	752,300 dosis
77838	01-oct-21	727,200 dosis
77883	01-oct-21	717,400 dosis
77949	01-oct-21	896,200 dosis
77967	05-oct-21	904,000 dosis
77970	05-oct-21	800,000 dosis
78012	07-oct-21	821,700 dosis
78013	07-oct-21	766,000 dosis
78022	21-oct-21	879,200 dosis
78038	21-oct-21	864,700 dosis
78037	22-oct-21	873,000 dosis
78039	26-oct-21	867,000 dosis
78064	29-oct-21	793,500 dosis
78074	29-oct-21	914,300 dosis
78075	05-nov-21	915,200 dosis
78076	08-nov-21	906,800 dosis
78078	09-nov-21	830,800 dosis

78101	11-nov-21	620,400 dosis
Total de liberaciones de vacuna AstraZeneca/Liomont a la fecha		47,373,270

Lotes liberados de la Vacuna Ad5/nCoV Covidencia (Cansino)

Lote	Fecha liberación	Número de dosis
A020121	22-mar-21	327,510 dosis
A020221	22-mar-21	318,830 dosis
A020321	22-mar-21	309,380 dosis
A030421	07-abr-21	224,790 dosis
A030521	07-abr-21	207,470 dosis
A030621	16-abr-21	210,290 dosis
A030821	16-abr-21	291,660 dosis
A030721	16-abr-21	164,470 dosis
A031021	23-abr-21	293,530 dosis
A030921	23-abr-21	285,860 dosis
A041121	30-abr-21	226,700 dosis
A041221	30-abr-21	275,930 dosis
A041321	05-may-21	198,840 dosis
A041521	07-may-21	198,670 dosis
A041621	07-may-21	271,820 dosis
A041721	11-may-21	208,220 dosis
A041421	13-may-21	203,290 dosis
A041821	14-may-21	202,700 dosis
A041921	17-may-21	125,350 dosis
A062321	25-jun-21	212,890 dosis
A062421	05-jul-21	151,860 dosis
A062621	09-jul-21	217,900 dosis
A062821	13-jul-21	224,690 dosis
A062721	13-jul-21	224,290 dosis
A063121	30-jul-21	208,700 dosis
A063221	30-jul-21	207,730 dosis
A063021	04-ago-21	186,230 dosis
A062921	04-ago-21	157,510 dosis
A073421	19-ago-21	209,230 dosis
A073521	20-ago-21	210,250 dosis
A073621	20-ago-21	210,910 dosis
A083721	23-ago-21	211,110 dosis
A083821	22-sep-21	306,310 dosis

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

A093921	24-sep-21	306460 dosis
A094021	24-sep-21	237550 dosis
A094121	27-sep-21	300,650 dosis
A094221	29-sep-21	295930 dosis
A094321	01-oct-21	285,040 dosis
A094421	15-oct-21	330,920 dosis
A094521	15-oct-21	326,870 dosis
A094621	15-oct-21	329,350 dosis
A094721	20-oct-21	326,240 dosis
A094921	21-oct-21	262,060 dosis
A094821	22-oct-21	260,230 dosis
A105021	22-oct-21	263,450 dosis
A105121	25-oct-21	262,750 dosis
A105221	29-oct-21	234,830 dosis
A105321	29-oct-21	235,780 dosis
A105521	04-nov.21	236,180 dosis
A105421	05-nov-21	242,890 dosis
A105621	05-nov-21	297,840 dosis
A105721	10-nov-21	223,500 dosis
A106121	17-nov-21	315,840 dosis
A106221	17-nov-21	249,160 dosis
Total de liberaciones de vacuna Cansino a la fecha		13,084,840 dosis

- 45.** Además, dicho organismo público emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer el proceso de liberación de lotes de vacunas envasadas en México para la prevención de COVID-19, información que también fue desglosada por farmacéutica y entidad federativa de envasados; como se advierte de lo siguiente:

La siguiente tabla se refiere a las liberaciones para uso de emergencia de los lotes envasados en el Estado de México por la farmacéutica Laboratorios Liomont, S.A. de C.V., correspondientes a la vacuna AstraZeneca:

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022

Número	Fecha de liberación	Cantidad de lotes liberados	Número de dosis
1	28 de mayo de 2021	1	809,800
2	9 de junio de 2021	1	834,200
3	10 de junio de 2021	1	476,800
4	18 de junio de 2021	1	891,600
5	23 de junio de 2021	1	809,700
6	28 de junio de 2021	1	900,400
7	1º de julio de 2021	1	908,200
8	2 de julio de 2021	1	914,200
9	7 de julio de 2021	2	1'751,800
10	12 de julio de 2021	2	1'669,800
11	14 de julio de 2021	2	1'864,500
Total de liberaciones de vacuna AstraZeneca / Liomont a la fecha		14 lotes	11'831,000 dosis

A continuación, se muestran las liberaciones para uso de emergencia de lotes envasados en Querétaro por la farmacéutica Drugmex, S.A.P.I. de C.V., referentes a la vacuna CanSino Biologics:

Número	Fecha de liberación	Cantidad de lotes liberados	Número de dosis
1	22 de marzo de 2021	3	955,720
2	07 de abril de 2021	2	432,260
3	15 de abril de 2021	3	666,420
4	23 de abril de 2021	2	579,390
5	30 de abril de 2021	2	502,630
6	05 de mayo de 2021	1	198,840
7	07 de mayo de 2021	2	470,490
8	11 de mayo de 2021	1	208,220
9	13 de mayo de 2021	1	203,290
10	14 de mayo de 2021	1	202,700
11	17 de mayo de 2021	1	125,350
12	25 de junio de 2021	1	212,890
13	2 de julio de 2021	1	151,860
14	9 de julio de 2021	1	217,900
15	13 de julio de 2021	2	448,980
Total de liberaciones de vacuna CanSino Biologics a la fecha		24 lotes	5'576,940 dosis

En total se han liberado 11 millones 831 mil dosis de la vacuna AstraZeneca y 5 millones 576 mil 940 dosis de la vacuna CanSino Biologics. El total de liberaciones para uso de emergencia de ambos biológicos envasados en México es de 38 lotes con 17 millones 407 mil 940 dosis.

- 46.** Con independencia de que la información liberada por el Estado Mexicano se refiera a lotes de producción de vacunas contra el SARS-CoV-2 de ciertas farmacéuticas, se considera que esta información también ha sido tratada de manera abierta, pues los datos del reconocimiento del insumo aplicado se plasman en los certificados y comprobantes de vacunación expedidos por la Secretaría de Salud:¹⁷

¹⁷ Véase: Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México, versión 5.1 de 28 de abril de 2021. Pág. 49-20.

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022

Nombre: CURP:

1era Dosis

Fecha de vacunación: Lote biológico: Estatus: Dosis aplicada

Laboratorio: Lote diluyente:

2da Dosis

Estatus: Pendiente de aplicación

Código QR

Certificado no disponible

47. Lo anterior implica que el Estado Mexicano, como parte de la Política Nacional de Vacunación, consideró como uno de los elementos relevantes y datos básicos que deben ponerse a disposición de las personas que son inmunizadas a través de la vacunación, al número de lote que corresponde a las dosis administradas; lo que refuerza la conclusión de que no puede considerarse que dicha información ponga en riesgo la ejecución de las acciones para combatir la pandemia que aquí nos ocupa.
48. Esto es, las autoridades en cada emisión de certificados de vacunación han dado a conocer información relacionada con los lotes de producción de las vacunas aplicadas, la cantidad de dosis fabricadas y la empresa farmacéutica responsable del suministro.
49. Lo anterior permite establecer que la divulgación de los datos referidos de las vacunas, no son elementos que pongan en entredicho el

suministro de vacunas, y por ende, que llegara a generarse un riesgo a la seguridad nacional.

50. Ahora bien, en cuanto a esta información, pero referida con aquellas vacunas que aún no han sido administradas, debe considerarse que tampoco se acredita un riesgo a la seguridad nacional y para ello es necesario realizar la siguiente prueba de daño:
51. Debe precisarse que dentro de la categoría de vacunas que no han sido aplicadas a la población, se encuentran aquellas que, por el paso del tiempo, ya no son aptas para ser administradas, esto es, las caducadas. En razón de lo anterior, al emprender el examen se trata de ambos casos: las vacunas que no han sido administradas de manera general y, en estricto sentido, las que se catalogan como caducadas.
52. En primer término, **el riesgo no es demostrable**, porque no se generaría una responsabilidad administrativa a los servidores públicos, pues dicha entrega de información realiza al tenor de lo previsto en el artículo 6° constitucional, y a través de los mecanismos establecidos para ello. Tampoco existe un nexo causal entre la afectación al derecho a la información y la eficacia en la aplicación y ejecución de la Estrategia Nacional de Vacunación, pues es incluso favorable para este plan, pues el conocer cuáles son las vacunas que aún no se han utilizado o incluso que ya no son aptas para hacerlo, fortalece la transparencia y da seguridad a la población en el conocimiento de las vacunas que les suministrarán.
53. **Como se indica, su divulgación lejos de causar un perjuicio, se traduce en una garantía adecuada en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública**, pues se estaría poniendo a disposición de la ciudadanía e incluso de las propias autoridades mexicanas, datos relevantes que resultan útiles para verificar no sólo la

autenticidad de los certificados de vacunación, sino para que la población tenga certeza de que las dosis aplicadas son aquellas que no han sido utilizadas previamente y no han perdido su efectividad por el paso del tiempo (caducidad).

54. Recordemos que por interés público debe entenderse el requisito esencial para que pueda justificarse la prevalencia del derecho a ser informado en un Estado democrático y lo que debe considerarse al referir dicho principio es la relevancia pública de lo informado para la vida comunitaria, es decir, que se trate de asuntos de interés general¹⁸.
55. En este sentido, reconocer lo anterior, se traduce en el adecuado ejercicio de la rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales y adecuado el manejo o administración de los recursos públicos para fines de salud pública.
56. **El riesgo no es identificable**, pues aun cuando se señale que existe interés general en la población para contar con vacunas suficientes y continuar con la eficacia del plan de vacunación, frente al derecho a la información de un particular; lo cierto es que la sociedad en general y particularmente la población que va a ser sujeta a la inmunización tiene interés en que exista transparencia en el estatus o condiciones que guardan las dosis que serán o fueron aplicadas, pues ello genera confianza y permite una mayor aceptación y uso voluntario. Lo anterior, es acorde con la resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde en su punto V, numeral 20, establece como obligaciones de los Estados en materia de acceso a la información, transparencia y combate a la corrupción divulgar

¹⁸ Véase la resolución en el **amparo directo 6/2009**, fallado en sesión de siete de octubre de dos mil nueve por unanimidad de cinco votos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

proactivamente aquellos datos referidos a registros, estudios, planes de vacunación y en general, la información relativa a la adquisición, importación, distribución, priorización, aplicación de vacunas; así como de los procesos y procedimientos de vigilancia y control aplicados.¹⁹

57. Además, no debe perderse de vista que el derecho de acceso a la información se traduce en una prerrogativa de vertiente pública, colectiva o institucional; de esta forma, deberá respetarse el derecho de los individuos no sólo a expresar el pensamiento propio sino también, como miembros de un colectivo, a recibir información, lo que hace que tal derecho reciba la característica de ser de orden público y de interés social.
58. Incluso, de conformidad con los datos expuestos anteriormente, se advierte que el riesgo al que se refiere la recurrente se encuentra en cierta medida materializado toda vez que la autoridad y las empresas farmacéuticas ya han dado a conocer los datos sobre el número de dosis y lotes de las vacunas que se encuentran liberadas y se ha desglosado dicha información por entidad federativa.
59. De ahí que, si hasta el momento existe información pública semejante a la que en este caso se solicita y no se ha constatado el riesgo en los términos planteados por la parte recurrente, tampoco es posible asumir que, al revelar los mismos datos, pero sobre las vacunas que no han sido aplicadas, se actualice la condición excepcional de seguridad nacional para clasificar dicha información.

¹⁹ V. Derecho de acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción 20. Con sujeción a la obligación de transparencia activa, los Estados deberán divulgar proactivamente aquellos datos referidos a registros, estudios, planes de vacunación y en general, la información relativa a la adquisición, importación, distribución, priorización, aplicación de vacunas; así como de los procesos y procedimientos de vigilancia y control aplicados. La asignación de recursos públicos para la adquisición de vacunas genera obligaciones en materia de acceso a la información y por lo tanto quienes reciban o ejecuten, total o parcialmente, dichos recursos públicos para la fabricación, venta, distribución y/o aplicación de vacunas, también deben transparentar proactivamente la información relacionada con estas actividades asociadas al proceso de inoculación.”

- 60. Tampoco se acredita el riesgo de perjuicio**, en tanto que, si bien se señala que el conocimiento de dicha información repercute en el ámbito de la seguridad nacional, no está demostrado de manera alguna porqué dicha información puede llegar a generar un daño en dicha esfera.
- 61.** En efecto, la Consejera recurrente estima que se pondría en peligro la estrategia de vacunación pues hacer pública la información solicitada conllevaría que los grupos de delincuencia organizada conozcan la ubicación y destino que se le da a las vacunas no empleadas, así como a la elaboración de documentos apócrifos, particularmente los certificados de vacunación.
- 62.** Sin embargo, contrario a ello, la divulgación requerida no impacta de tal manera que afecte las condiciones que rodean a la seguridad nacional, en los términos referidos por la recurrente.
- 63.** Este Tribunal Pleno encuentra que, si bien la población en general puede hacer uso indebido de la información relativa al número de dosis y de lotes sobre las vacunas que no serán aplicables (como lo puede ser la falsificación del documento que acredita el esquema de vacunación de la ciudadanía), ya sea porque hasta el momento el lote de dosis vigentes se encuentra almacenado o sobre aquellas que han caducado y por tanto ya no es viable su aplicación; lo cierto es que ello dicho riesgo, de ninguna manera justifica la clasificación de dichos datos por motivos de seguridad nacional. Lo anterior, pues la posible actualización de dicha conducta ilícita escapa del ámbito de aplicación en la materia que aquí nos ocupa.
- 64.** Aun, en caso de suceder la situación antes planteada, la autoridad sanitaria cuenta con la información suficiente para advertir cuando se presenten documentos apócrifos; información que precisamente es la

que debe ponerse a disposición de la ciudadanía para que así no solamente sea la autoridad quien se percate de situaciones irregulares, sino que instituciones cuenten con los datos suficientes para tener conocimiento de aquellas dosis que aún se encuentran en espera de ser aplicadas o aquellas que han caducado y que, su administración, conllevarían poner en riesgo la salud de la población.

65. Además, se encuentra que alrededor de dicha hipótesis, existen diversos elementos que precisamente sustentan la afirmación de que no se actualiza la reserva en los términos planteados por la recurrente.
66. En primer término, no se demuestra el riesgo pues, como ya se refirió, la divulgación de la información solicitada no sólo impactaría en la actividad de los grupos delictivos, sino a la población en general. En segundo término, como ya se dijo en párrafos anteriores, lejos de perjudicar el interés social, dar a conocer estos datos permitiría que los particulares o autoridades tengan certeza sobre las dosis que están siendo aplicadas y conocer los datos de identificación de las vacunas que no son utilizadas por numerosos motivos, para así reconocer documentos falsificados.
67. No obstante lo anterior, el único impacto real que tendría la falsificación de los certificados de vacunación, como lo sostiene el recurrente, sería en caso de que las instituciones gubernamentales exijan a la población presentar dicho documento para determinados fines. Por el contrario, la Estrategia Nacional de Vacunación ha sido enfática en comunicar que su ejecución depende de la voluntad de las personas para inmunizarse contra el virus SARS-CoV-2, incluso para incentivar dicho plan, se estableció como gratuita la aplicación de las vacunas; en el caso de México, a la fecha del dictado de esta resolución, no se advierte la obligación de la ciudadanía a inmunizarse a través de los mecanismos efectuados por el Gobierno Federal.

- 68.** Con lo anterior, se concluye que en ningún momento la divulgación de los datos relativos al número de dosis, de lote y la empresa fabricante de las vacunas que no han sido aplicadas, hasta el momento, a la población, se contrapone con la ejecución de la Estrategia Nacional de Vacunación o con el interés público de la ciudadanía mexicana de combatir y prevenir la pandemia generada por el virus SARS-CoV-19.
- 69.** Lo mismo ocurre con la información relativa a la destrucción de vacunas que han caducado, pues esta implica, de manera genérica, hacer del conocimiento de la población el proceso que la autoridad competente lleva a cabo con las dosis una vez perdida su efectividad por el paso del tiempo; sin que dicha respuesta suponga difundir datos técnicos, de ubicación, transporte, protocolos de seguridad o logística, que puedan generar un riesgo en el suministro de las vacunas según la campaña nacional de vacunación.
- 70.** Por el contrario, en atención a lo expuesto en los puntos anteriores, dar a conocer esta información se traduce en una exigencia de carácter público, la cual beneficia no sólo al derecho a la información y al de salud, sino al ejercicio de rendición de cuentas de las autoridades y al manejo efectivo de sus recursos públicos, tal como se estimó anteriormente en cuanto a la información relativa al número de dosis y lotes de vacunas que han caducado.
- 71.** De ahí que, en el presente caso, no puede considerarse actualizada la causal de reserva invocada por el sujeto obligado al haberse acreditado que su divulgación no actualiza o potencializa un riesgo o amenaza a la seguridad nacional.
- 72.** Así, conforme al alcance de esta sentencia, este Tribunal Pleno concluye que el recurso de revisión interpuesto deviene infundado.

73. En ese orden de ideas, es necesario confirmar la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el recurso de revisión **RAA *******.

RESUELVE:

PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional.

SEGUNDO. Se confirma el sentido de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada dentro del expediente del recurso de revisión **RAA *******, derivado de la solicitud de información registrada con el folio *********.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con los resolutivos primero y segundo:

Se aprobó por unanimidad de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente en funciones Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los considerandos del primero al quinto y séptimo relativos,

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2022**

respectivamente, a la competencia, a la
procedencia, a la legitimación, a la oportunidad,
a los agravios y al estudio de fondo.

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat y Laynez Potisek, respecto del considerando sexto, relativo al aspecto preliminar. El señor Ministro Presidente en funciones Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra.

Los señores Ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán y la señora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández no asistieron a la sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el primero previo aviso a la Presidencia, el segundo por gozar de vacaciones al haber integrado la Comisión de Receso correspondiente al primer período de sesiones de dos mil veintitrés, y la tercera por desempeñar una comisión oficial.

Dada la ausencia de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, así como la del señor Ministro Aguilar Morales, siguiente en el decanato, el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea asumió la Presidencia del Tribunal Pleno en su carácter de decano para el desarrollo de esta sesión, en atención a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El señor Ministro Presidente en funciones Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firma el señor Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe y certifica, para los efectos de lo previsto en el artículo 68, fracciones III y XIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa por la cual el engrose no se suscribe por el Ministro que presidió en funciones la sesión en la que se discutió y

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5/2022**

aprobó la sentencia del presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional.

PONENTE

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, - - - - -

- - - - - C E R T I F I C A : - - - - -

Para efectos de lo previsto en el artículo 68, fracciones III y XIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la conclusión del período constitucional del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea con motivo de la renuncia aprobada por el Senado de la República en su sesión del quince de noviembre de dos mil veintitrés, al tenor de su comunicado número 451 de esa fecha, se hace constar que, como se advierte de las páginas de la 9 a la 12 del acta de la sesión pública del Tribunal Pleno celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea la presidió en funciones, en su calidad de decano en atención a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se resolvió y aprobó la sentencia del recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 5/2022, conforme a los considerandos y los resolutivos contenidos en este engrose, lo que se precisa para los efectos de lo establecido en la primera parte de la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. - - - - -
Ciudad de México a seis de junio dos mil veinticuatro. - - - - -

En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que se encuentra en esos supuestos normativos.